

Buenos Aires, 10 de abril de 2007.

Vistos los autos: "Bonafini, Hebe María Pastor s/ injurias".

Considerando:

1°) Que contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que, al anular todo lo actuado a partir de la decisión que —frente a la derogación del delito de desacato— había ordenado proseguir el trámite de la causa bajo las reglas de los juicios especiales, sobreseyó definitivamente en la causa a la querellada María Hebe Pastor de Bonafini, el apoderado del querellante Carlos Saúl Menem interpuso el recurso extraordinario, que fue concedido a fs. 767.

2°) Que la decisión recurrida en la instancia del art. 14 de la ley 48 fue adoptada con sustento en que la tramitación de la causa violaba la garantía constitucional contra la doble persecución penal, materia que, como regla, habilita la instancia extraordinaria (Fallos: 319:43), máxime cuando el recurrente también ha invocado como federal la cuestión atinente al apartamiento en que había incurrido el tribunal de alzada con respecto a lo resuelto por esta Corte en su anterior intervención en esta misma vía federal.

3°) Que esta causa se inició mediante la querella instaurada con fecha 11 de abril de 1991 (fs. 11) por la posible comisión del delito de desacato, configurado por las expresiones vertidas por María Hebe Pastor de Bonafini en una entrevista periodística que fue transmitida por Telemadrid el 21 de enero de 1991, en la cual habría vertido conceptos presuntamente lesivos para la dignidad y decoro del ex presidente de la República Argentina Carlos Saúl Menem.

Con motivo de la derogación del delito de desacato

—ley 24.198, de fecha 3 de junio de 1993—, el apoderado del querellante solicitó que la acusación fuese por el delito de injurias (fs. 233); petición que fue rechazada por el juez de primera instancia, quien sobreseyó a la imputada en orden al delito por el que inicialmente había sido acusada (fs. 250/251).

A su turno, la alzada revocó dicha decisión y dispuso que el juez de grado prosiguiera el trámite de la causa bajo las reglas de los juicios especiales —calumnias e injurias— (fs. 289/293); en este marco, al contestar el traslado de la acusación, la querellada planteó la excepción de falta de jurisdicción que fue rechazada en primera instancia (fs. 538/541).

Ahora bien, durante el trámite del recurso de apelación la alzada hizo lugar a un planteo de prescripción de la acción penal introducido por la defensa al expresar agravios (fs. 607); decisión que fue revocada por esta Corte mediante la sentencia dictada el 26 de agosto de 2003 (fs. 709/713).

Radicado el expediente ante la Sala II de la Cámara Federal, dicho tribunal —como se indica en el considerando 1°— resolvió anular todo lo actuado a partir de la decisión que había dispuesto proseguir el trámite de la causa bajo las reglas previstas para los juicios especiales, con fundamento en que se había configurado una violación a la garantía constitucional contra la doble persecución penal (fs. 731/733).

4°) Que al tomar intervención el señor Procurador General de la Nación en los términos del art. 33, inc. a, ap. 5, de la ley 24.946, ha propiciado que se suspenda el trámite del presente recurso a resultas de lo que decidan los jueces de la causa, toda vez que era muy probable que la aplicación de las nuevas reglas sobre prescripción introducidas por la ley 25.990 pudiesen tener consecuencias en este proceso, dado

que luego de la acusación formulada el 31 de marzo de 1992 no había ningún acto pasible de ser subsumido en alguno de los supuestos del art. 67 del Código Penal en su nueva redacción.

5°) Que, con arreglo a reiterada doctrina de esta Corte, la prescripción es de orden público y debe ser declarada de oficio por el Tribunal a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario.

6°) Que, con esta comprensión, cabe concluir que en el *sub lite* se verifican los requisitos positivos y negativos de la prescripción, esto es, que ha transcurrido el plazo del art. 62 del Código Penal y que no ha habido causales de suspensión o interrupción.

En efecto, y sin perder de vista que desde la presunta comisión del hecho han transcurrido más de quince años, se encuentra acreditado y no es objeto de divergencia por el querellante que en este expediente entre la acusación formulada por la accionante a fs. 72 —que data del 31 de marzo de 1992— y la decisión del 18 de mayo de 1994 que ordenó la prosecución de la causa de acuerdo al trámite previsto en el art. 591 y siguientes del Código de Procedimiento en Materia Penal —ley 2372—, ha sido superado el plazo de dos años que en la especie fija el art. 62 del Código Penal, sin que se registre alguna de las causales que establece el art. 67, cuarto párrafo, del Código Penal, según la reforma introducida por la ley 25.990.

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador

-//-

-//- General de la Nación, se declara extinguida la acción penal en la presente causa. Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT (según su voto) - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto) - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

ES COPIA

VO-//-

-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

Que el infrascripto concuerda con el voto de la mayoría, con excepción del considerando 5° que, en cambio, queda redactado como sigue:

5°) Que, con arreglo a reiterada doctrina de esta Corte, la prescripción en materia penal es de *orden público* y debe ser *declarada* de oficio por el Tribunal (Fallos: 186:289); se produce de pleno derecho (Fallos: 207:86; 275:241; 297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029, 2205; 312:1351; 313:1224; disidencias de los jueces Fayt, Bossert y de Petracchi, Boggiano en Fallos: 322:360; 323:1785, entre otros); debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (Fallos: 322:300) a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario (Fallos: 186:396) y debe ser declarada en cualquier instancia del juicio (Fallos: 313:1224).

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General de la Nación, se declara extinguida la acción penal en la presente causa. Notifíquese y devuélvase. CARLOS S. FAYT.
ES COPIA

VO-//-

-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI

Considerando:

Que el infrascripto concuerda con el voto de la mayoría, pues una decisión de esta naturaleza se sustenta en los precedentes de Fallos: 305:652 y 321:2375 —disidencia del juez Petracchi— y sus citas.

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General de la Nación, se declara extinguida la acción penal en la presente causa. Notifíquese y devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.

ES COPIA

VO-//-

-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que el recurso extraordinario es inadmisibile (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General, se declara improcedente el recurso extraordinario. Notifíquese y devuélvase. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Recurso extraordinario interpuesto por **Carlos S. Menem (querellante)**, representado por el Dr. **Jorge E. Anzorreguy**
Traslado contestado por **Hebe Pastor Vda. de Bonafini**, representada por los Dres. **Antonio Rojas Salinas y Eduardo S. Barcesat**
Tribunal de origen: **Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II**